

LAS FALLAS DEL ESTADO

Una aproximación desde la teoría de la elección pública

Por Carlos García Sandoval¹

RESUMEN

El problema de las fallas del Estado se ha convertido en un fenómeno recurrente en gran parte del mundo y, particularmente, en América Latina.

Las fallas involucran situaciones que van desde la implementación de políticas populistas, burocratización de los gobiernos, saturación de la oferta de bienes públicos, tendencia recurrente a la evasión de impuestos, favoritismo legal y político dirigido a los grupos de presión y corrupción (de funcionarios y políticos), entre otros.

Las alternativas de solución han girado siempre en torno a la búsqueda de políticos y burócratas con capacidad de liderazgo y supuestamente incorruptibles pero, en la práctica, este esfuerzo no suele ser eficaz de acuerdo con las expectativas de los votantes, porque las fallas del Estado si bien se pueden minimizar, nunca desaparecen.

Puede decirse, entonces, que las fallas del Estado (tanto en un marco democrático como totalitario) son intrínsecas a éste debido a que la conducta de los agentes interactuantes en el ámbito del poder responde a cierta racionalidad que no es concurrente con los objetivos de los demás. El efecto será un Estado imperfecto que requerirá de los incentivos correctos si es que se desea que estas fallas, por lo menos se minimicen.

Palabras clave:

Teoría de la Elección Pública, votantes, burócratas, políticos, cabildeos, optimización racional, presupuesto público, bienestar general, bienestar individual, riesgo moral, problema de agencia, asimetría de información, alineamiento de objetivos, corrupción.

ABSTRACT

The problem of State failures has become a recurring phenomenon in much of the world and particularly in Latin America.

Failures involving situations ranging from the implementation of populist policies, bureaucratic governments, saturation of the supply of public goods, the recurrent tendency to tax evasion, legal and political favoritism led to lobbying and corruption (officials and political), among others.

Alternative solutions have always revolved around the search for politicians and bureaucrats with leadership and supposedly incorruptible but, in practice, this effort is often not effective, according to the expectations of the voters because state failures, but can be minimized, never disappear.

It can be said, then, that state failures (both within a democratic framework as totalitarian) are intrinsic to it because the behavior of interacting agents in the field of power meets certain rationality that is not concurrent with the objectives of the others. The effect will be an imperfect state will require the right incentives if it is to these faults, at least minimized.

Keywords: Theory of Public Choice, voters, bureaucrats, politicians, lobbyists, rational optimization, public budget, general welfare, individual welfare, moral hazard, agency problem, asymmetric information, alignment of objectives, corruption.

INTRODUCCIÓN

Existen diversas posturas sobre el papel que debe tener el Estado en una economía de mercado, sin embargo se acepta que la presencia de este debe ser necesaria, sobre todo si se piensa en aplicar marcos legales que garanticen los derechos generales de los ciudadanos, pero también cuando se requiere de la producción de "bienes públicos" (que el sector privado no suele producir con eficiencia) o administrar los "recursos de uso común" que suelen ocasionar conflictos debido a su libre acceso y la inexistencia de derechos de propiedad.

¹ Profesor de la Facultad de Ingeniería Económica y CC.SS.

Por ejemplo, los efectos externos (deseados o indeseados) generados en la producción de los bienes públicos y en la administración de los recursos de uso común exigen que exista algún arreglo institucional que pueda imponer su correcta asignación superando, incluso, el mecanismo de los precios como señales del mercado.

Otro de los ámbitos en los que se suele justificar la actuación del Estado se refiere a la administración de políticas y programas públicos, que son solicitados por la misma ciudadanía, mediante algún sistema de elección pública. Esto requiere que exista algún agente externo a los mercados que aplique ciertos procedimientos aceptados, utilizando jerarquías de mando, aunque consumiendo los recursos del resto del sistema económico.

Por otro lado, cuando aparecen "fallas en el mercado", la misma ciudadanía suele recurrir al Estado para tratar de solucionarlas, aunque esto esté lamentablemente asociado a la aparición de otros tipos de "fallas" en el mismo Estado y que implican pérdidas de eficiencia irreversibles, asignación incorrecta de recursos, distorsiones de precios y, sobre todo, actividades relacionadas con la corrupción de los burócratas y de los políticos.

El trabajo teórico más importante desarrollado en este ámbito de estudio es el del Premio Nobel de Economía de 1986, James M. Buchanan, quien conjuntamente con Gordon Tullock publicaron la obra *"El cálculo del Consenso"* (1962), llegando a conclusiones sorprendentes sobre la dinámica del Estado, la política y el poder, desde un punto de vista económico.

Tampoco se puede dejar de mencionar el papel destacado de otros economistas importantes como Ronald Coase, Kenneth Arrow, George Stigler y Gary Becker. En este sentido, las líneas que presentamos aquí contienen mi visión particular de este polémico tema.

EL PROCESO POLÍTICO

De acuerdo con la teoría de la elección pública el proceso político puede analizarse usando la teoría económica y aceptando que las conductas de los agentes participantes se basan en decisiones racionales que consideran que los votos y presupuestos, son esencialmente escasos.

En este sentido, el proceso político es una actividad en la que el poder no solo es un medio para implementar políticas y programas públicos, sino también un bien escaso altamente apreciado por los políticos, debido a que les produce satisfacción cuando observan que su acción produce modificaciones en el entorno del resto de los agentes participantes.

Ahora bien, no se puede pretender tampoco que en el proceso político no existan motivaciones altruistas genuinas y una vocación de servicio entre los políticos, además de que los votantes también evalúen el bienestar general (conjuntamente con sus intereses particulares). A pesar de esto, no deja de ser cierto también que en ese balance de fines y medios exista también un cálculo económico, en el sentido de que cada uno de los grupos que participan en el proceso político procurará obtener su mejor resultado posible sabiendo que sus recursos particulares son escasos.

En este sentido, el proceso político se apoya en una estructura en la que interactúan, por lo menos, cuatro grupos de agentes: (1) los votantes, (2) los políticos, (3) los burócratas y (4) los grupos de presión.

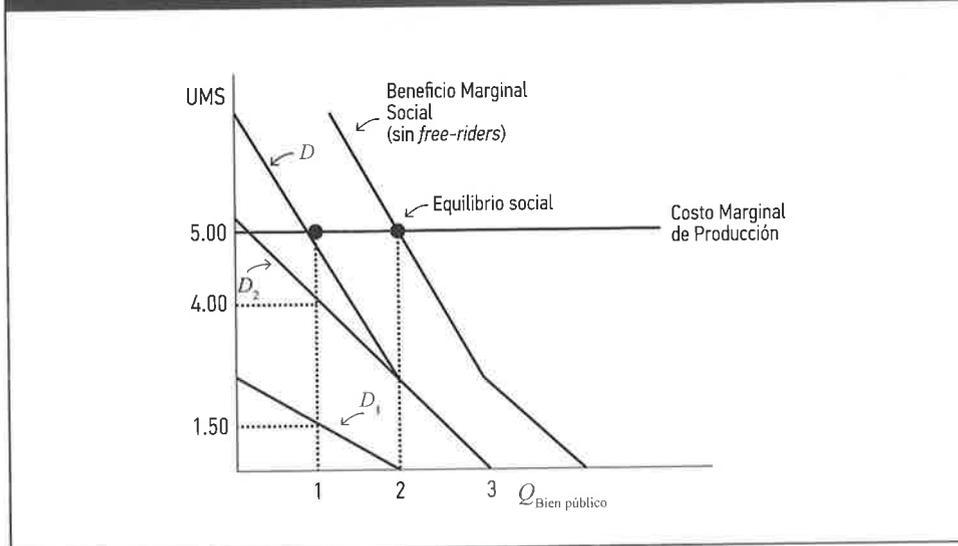
Cada uno de estos grupos de agentes tiene un cierto tipo de comportamiento especial pero, en general, procuran optimizar alguna "función objetivo". Este comportamiento se suele producir de un modo natural, sobre todo si suponemos que cada grupo percibe que tiene tan solo ciertos recursos escasos para satisfacer sus fines.

VOTANTES

Podemos interpretar a los votantes como a un grupo de agentes económicos que están interesados en maximizar su propio bienestar, y que involucra (además de la satisfacción por el consumo de bienes privados) a la satisfacción por el consumo de cierta dotación de bienes públicos y el acceso a recursos de uso común.

Esto producirá un efecto imprevisto debido a que los "bienes públicos" son un grupo de bienes que producen "externalidades", es decir, beneficios extendidos a terceros pero que no implican necesariamente que se tenga que hacer algún pago por ellos. Un ejemplo es la defensa nacional: si una persona evade sus impuestos, esto no evitará que de todos modos la reciba.

Gráfico 1: Comportamiento de un bien público



Así por ejemplo, el gráfico adjunto muestra que una dotación eficiente de un bien público se alcanza cuando la suma de las disposiciones a pagar de diferentes individuos cubre el valor de su costo marginal de producción. El problema surge, sin embargo, cuando la gente desea subvalorar sus propias disposiciones a pagar, con la esperanza de que otros paguen por ellos. El resultado será que la disposición a pagar del público será menor a la verdadera demanda de los mismos, mientras que su oferta efectiva terminará saturada.

A las personas que prefieren que otros paguen por ellas para obtener cierta dotación de los bienes públicos se les denomina en la teoría económica como "free-riders". Esto también puede entenderse como a un grupo de individuos difícilmente identificables que producen lo que se conoce como el "efecto polizón", es decir un beneficio que se obtiene sin tener que pagar por algo.

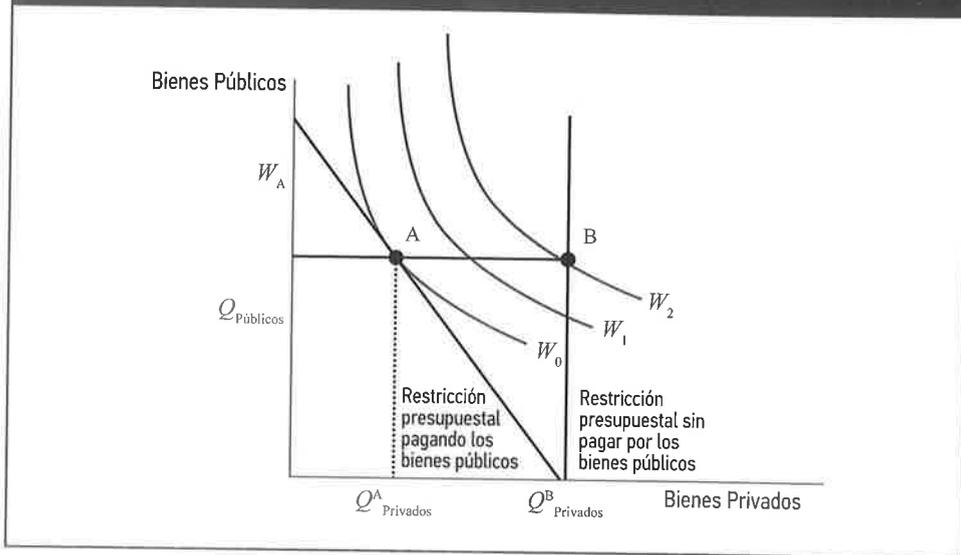
De acuerdo con esto, en el gráfico anterior es posible que se obtenga una subvaloración de la verdadera cantidad que se necesita del bien público. Por ejemplo, si las curvas de demanda

de los individuos 1 y 2 fueran más altas, la suma vertical de las mismas permitiría construir también una curva de demanda total más alta, produciendo un requerimiento de dos unidades del bien público y no de una sola, como se observa en apariencia.

En la teoría de la elección pública, la presencia de estos "free-riders" implica que los votantes preferirán votar por las ofertas electorales que prometan la dotación de bienes públicos sin tener que pagar por ellas. Los políticos lo saben (o lo intuyen) y en su deseo de ganar las elecciones siempre estarán tentados a ofrecer lo que los votantes quieren en términos individuales.

Esta conducta puede explicarse por el hecho de que habiendo, por lo menos, algún conjunto disponible de bienes públicos ofrecidos por el Estado con un precio cero, cualquier individuo racional procurará favorecerse siempre de esto para poder destinar el resto de su presupuesto limitado al consumo de otros bienes privados, pudiendo maximizar de este modo su propio bienestar individual. Es decir:

Gráfico 2: Maximización del bienestar individual de un *free-rider*



Por su parte, si los votantes lograran entender que no es posible producir los bienes públicos sin su debida financiación, los políticos podrían ensayar otras ofertas de dotación de estos bienes cuyo costo sería cargado a algún otro grupo específico (minoritario) para favorecer a otro grupo (mayoritario) que se convertiría en el proveedor esencial de votos.

Otro problema relacionado con los votantes tiene que ver con la recurrencia de la demanda de programas públicos subsidiados, sobre todo en lo concerniente al apoyo a grupos poblaciones en situación de pobreza, mediante financiamiento directo, o la dotación gratuita (o de bajo precio) de bienes y servicios de "interés público".²

Esto último no está directamente relacionado con la dotación de bienes públicos o recursos de uso común, pero sí con la dotación de otros bienes y servicios como la salud pública, la educación pública, los sistemas públicos de jubilaciones, los seguros públicos de desempleo, etc.

En estos casos los votantes demandan este tipo de bienes y servicios no necesariamente debido a una conducta de tipo "free-rider" sino porque el votante medio está afectado por un problema de "aversión al riesgo". Esto último significa que el votante medio valora mucho más los resultados ciertos que a los inciertos. No obstante, la economía de mercado se caracteriza por una constante toma de decisiones y otras situaciones que se desarrollan en condiciones de incertidumbre.

En este sentido, la demanda de muchos de estos bienes y servicios de "interés público" implica, en realidad, el deseo de trasladar el costo del riesgo que percibe la gente a terceros, es decir, al Estado. Lamentablemente, desde el punto de vista de la financiación de estos programas, el Estado es solo una ficción ya que aquí solo se trata de los contribuyentes y los contribuyentes son los mismos votantes.

Esto último producirá algunos problemas adicionales, es decir que: como el costo de los

² Debe diferenciarse aquí el concepto de bien público (en el sentido de un bien que es no rival y no excluyente) del concepto de un bien de "interés público", que puede tener el carácter de un bien privado pero que es altamente apreciado por proveer altos niveles de satisfacción y calidad de vida.

servicios de "interés público", que son deseados por los votantes, se traslada a los impuestos y el votante medio no desea pagar por ellos (o desea pagar poco), el mismo votante medio podría estar dispuesto a que se establezcan sistemas de impuestos progresivos para que una minoría con mayores ingresos pague los programas deseados por una mayoría con menores ingresos.

Asimismo, este problema se agravaría si existe, por lo menos, algún grupo de votantes que definitivamente no desea pagar en absoluto por los servicios de "interés público" que desea. En este caso se trataría de un sector "informal" que exige este tipo de servicios y programas pero que deliberadamente prefiere encontrarse fuera del alcance del Estado porque considera que el costo de la formalización es muy alto.

POLÍTICOS

Los políticos representan a un grupo de agentes que están interesados en maximizar la obtención de votos. Esto se debe a que los políticos desean el poder y, por lo tanto, constituyen el lado de

la oferta en el mercado político al tratar de proveer a los votantes los programas y políticas públicas que estos desean.

Todo esto hace que los políticos se comporten (en cierta forma) como los empresarios, al evaluar las necesidades de los votantes y ofrecerles "productos" que, supuestamente, maximizarán su bienestar.

En todo caso, en el intento de alcanzar el poder, los políticos deberán tomar en cuenta que los procesos electorales se ganan de acuerdo con lo que decida la mayoría. Sin embargo, también será cierto que si la mayor parte de los votantes desea bienes públicos sin tener que pagar por ellos (los "free-riders"), entonces, se podrán ensayar propuestas de tipo populista.

Analíticamente puede considerarse que los políticos atienden al objetivo de la maximización de los votos (V) en función del bienestar de los votantes (W) y del presupuesto que utilizarán para poner en práctica sus programas y políticas (P). Es decir:

$$V = f(W, P) \quad \text{donde } f'_W > 0 \text{ y } f'_P > 0$$

Por su parte, la función de bienestar de los votantes podemos imaginarla como una función que depende del presupuesto del gobierno para

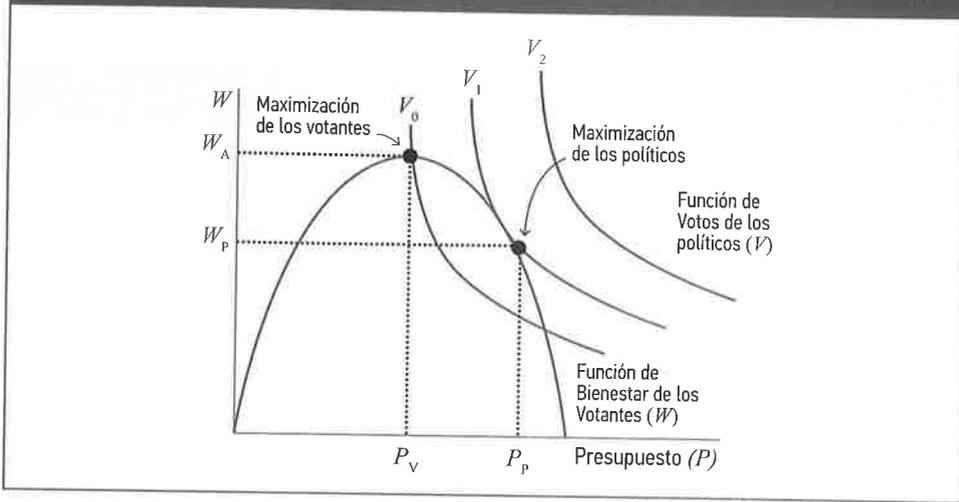
producir bienes públicos y demás programas y políticas. Es decir:

$$W = f(P)$$

Esta función debe ser tal que con un presupuesto cero el bienestar sería cero y con presupuesto igual al PIB el bienestar también sería cero también. Por tanto, en algún punto intermedio el bienestar de los votantes debería alcanzar su

punto máximo. No obstante, entre el bienestar de los votantes y el objetivo de maximización de votos de los políticos, se producirá una divergencia, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 3: La divergencia entre votantes y políticos



Este análisis muestra, entonces, que la relación entre votantes y políticos es más o menos así: (1) Los votantes desean bienes públicos y otros servicios pero no quieren pagar por ellos, (2) los políticos ofrecen programas en los que, por lo menos, algún grupo minoritario los financia y (3) los políticos terminan gastando más de lo que desean los votantes, en la provisión de los bienes públicos y demás servicios ofrecidos. Esto sin duda es ineficiente, aunque el comportamiento racional en el mercado político lleva irremediablemente a resultados "sub-óptimos".

En todo caso, debe tenerse presente que aun en el caso en el que los políticos sean conscientes de este problema tendrían poco margen para tratar de eliminarlo. Esto se debe a que los políticos al competir para tratar de ganar las elecciones se toparán con un problema semejante al del dilema del prisionero, es decir: que si no prometen a los votantes programas y políticas de "interés público" sin tener que pagar (o pagando poco) por ellos, otros políticos lo

harán y perderán las elecciones. Se tendrá, por lo tanto, un resultado "sub-óptimo" asegurado.

Además de esto, debe tenerse presente que para que los políticos puedan administrar la dotación de los bienes públicos y aplicar los programas y políticas públicas ofrecidas requieren, también, de la participación de los burócratas. Sin ellos no se podrían materializar las ofertas electorales, constituyéndose así en la base operativa del poder.

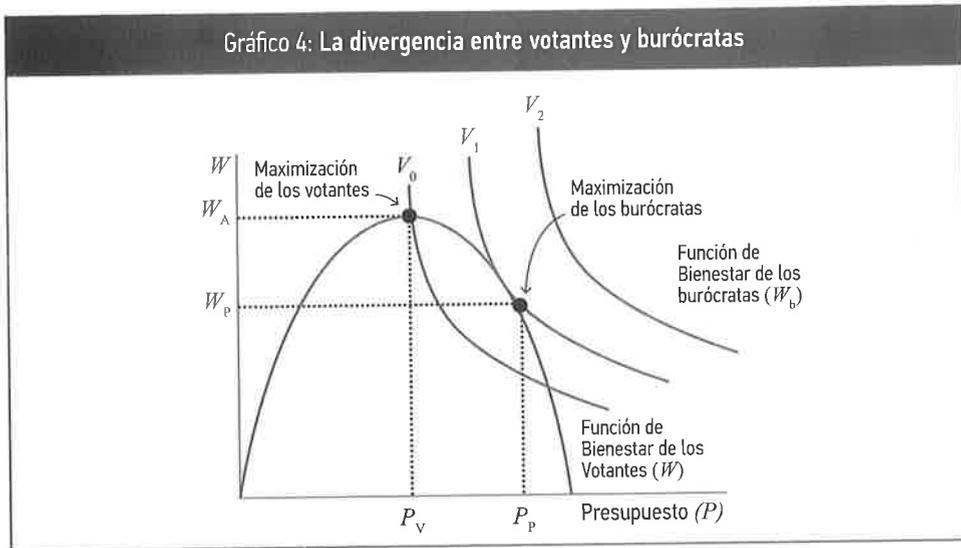
BURÓCRATAS

En un sentido concreto, los burócratas son funcionarios públicos que administran el aparato institucional del Estado y convierten las decisiones políticas en actividades concretas con resultados mensurables. No obstante, debe advertirse que los burócratas también procuran maximizar su propio bienestar (W_b), aunque este se encuentra en función del bienestar de los votantes (W), aunque también del presupuesto que administran (P). Es decir:

$$W_b = f(W, P) \text{ donde } f_w > 0 \text{ y } f_p > 0$$

Comparando esta función con la función de bienestar de los votantes, también se observa

(al igual que con los políticos) una divergencia, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:



Debe apreciarse, en todo caso, que la diferencia entre los burócratas y los políticos es que mientras los políticos son elegidos por los votantes, los burócratas son funcionarios públicos de carrera (o designados por los políticos) que deben implementar las ofertas electorales de éstos. Es decir que, se producirá un problema de agencia entre los políticos y los burócratas que sólo se resolverá si se alcanza un “alineamiento de objetivos”.

En este sentido, la teoría económica indica que esto se podrá resolver si los políticos “premiar” (de manera similar a lo que dice la teoría de los “salarios de eficiencia”) el desempeño de los burócratas, de acuerdo con la popularidad que éstos alcancen, ya que la popularidad conducirá finalmente a la esperada maximización de los votos.

En todo caso, puede apreciarse que por lo menos existe un punto de acuerdo entre los políticos y los burócratas, y es que ambos tienden a exagerar el uso del presupuesto del gobierno, aunque por diferentes razones: los políticos desean implementar más programas y políticas para aumentar (o afianzar) su poder,

mientras que los burócratas lo harán porque un mayor presupuesto brinda un mayor estatus y, probablemente, mayores salarios, entre otros beneficios que veremos posteriormente.

No obstante, si bien los votantes son un público objetivo importante en el proceso político, no son los únicos que determinan su dinámica. También existen otros grupos interesados (o “stakeholders”) que participan activamente y que provocan otras distorsiones, incluso mayores, que las observadas entre los tres primeros.

GRUPOS DE PRESIÓN

La presencia de los grupos de presión se produce cuando la competencia de los agentes económicos sobrepasa el ámbito de los mercados y se recurre al poder político para “maximizar rentas”, que de otro modo no se hubiesen podido obtener.

Para que esto funcione, el Estado tiene que ser permeable a las solicitudes de los grupos de presión, lo que ocurre cuando estos grupos tienen la posibilidad de financiar a los políticos en los procesos electorales, o mantenerlos en

el poder aportando recursos para mejorar su imagen o procurando acuerdos para impedir alguna desestabilización política.

El problema de los grupos de presión es que, para obtener los favores del Estado, a través de normas, exoneraciones o permisos especiales, deben obtener un "trato diferenciado" y, muchas veces, vulnerar el sentido general de la Ley. A esto se le denomina "lobby" o "cabildeo" y constituye una práctica común en muchas democracias en el mundo.

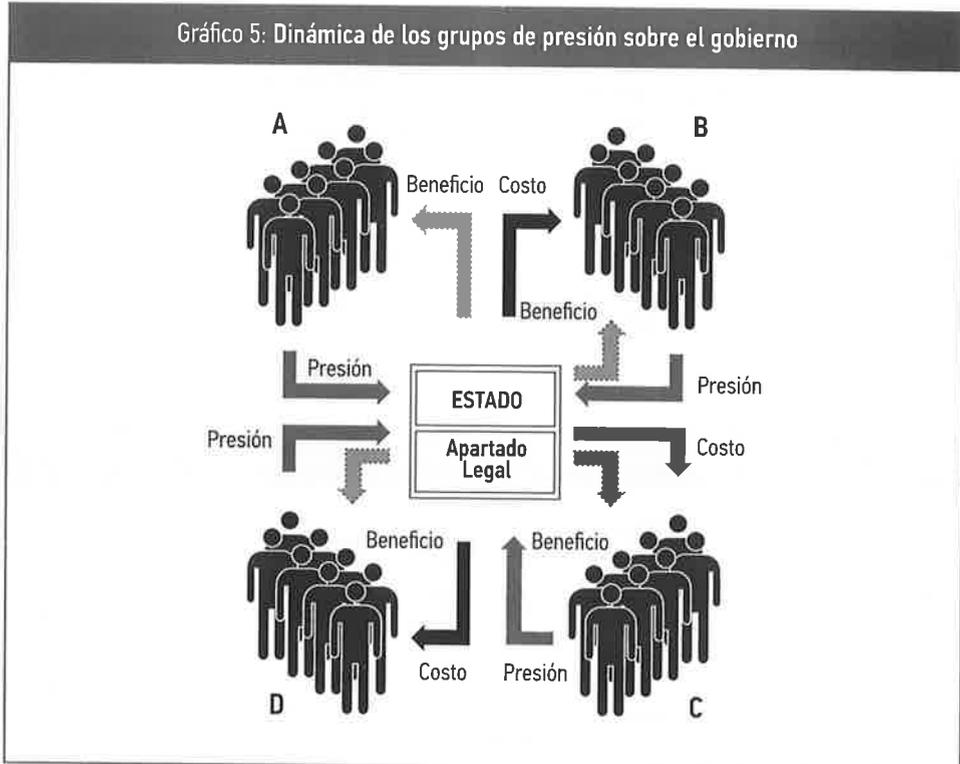
Un elemento importante a tener en cuenta es que la conducta de los grupos de presión tiene efectos negativos en el ámbito económico ya que la maximización de rentas, de ciertos grupos particulares, conduce a las conocidas

"pérdidas irre recuperables de eficiencia" y, por lo tanto, a una reducción a largo plazo del PIB potencial.

Algunos economistas como De Soto (1986) denominan a esto "mercantilismo". No obstante este término puede no ser preciso, debido a que el "mercantilismo" es un sistema histórico en el que el Estado regulaba la economía a cambio de un proteccionismo generalizado y monopolios comerciales con colonias existentes en ultramar. En todo caso, el "mercantilismo" al que se refiere De Soto no es sino una extrapolación al capitalismo actual sobre regulado e ineficiente.

Una buena ilustración de este fenómeno procede de Kafka (1981) y la presentamos en el gráfico que sigue a continuación:

Gráfico 5: Dinámica de los grupos de presión sobre el gobierno



Así, por ejemplo, cierto grupo de presión "A" presiona al Estado para que decrete una medida que lo beneficie. El Estado cede y hasta es posible que publicite las "bondades" de la medida, presentándola como un beneficio para el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, esta demanda por rentas, acogida por el gobierno, tendrá algunos efectos negativos. Es decir, que alguien tendrá que pagar un costo. En el gráfico presentado, "A" recibe el beneficio (línea discontinua) haciendo que otro grupo (en este caso B) pague el costo.

Es posible sin embargo que, en la práctica, el costo se diluya entre muchos otros, haciendo que individualmente nadie esté interesado en combatir la medida en cuestión.

No obstante, es posible que el Grupo B desee protegerse y presione al Estado para obtener beneficios compensatorios por la acción del Grupo A (lo que podría incluir, también una ganancia adicional). Sin embargo, también es posible que "B" no se percate siquiera de quién sería perjudicado por sus iniciativas de "cabildeo" (por ejemplo un Grupo C).

Se repetirá, entonces, este fenómeno cuando otros tengan que pagar por la medida. Los perjudicados desearán exigir, entonces, una nueva legislación que los proteja. Se irá formando, así una red de efectos que se irá complicando cada vez más. Lo que es peor, es que un grupo mayoritario (sin capacidad de

influnciar al Estado) terminará pagando, en términos netos, los beneficios obtenidos por A, B, C, etc.

¿BENEFICIOS CONCENTRADOS Y COSTOS DIFUNDIDOS?

Seguindo el razonamiento de Kafka (1981) una sociedad en la que operan mercados competitivos y que no se rebasan hacia el plano político será una sociedad en la que la igualdad de oportunidades y la eficiencia serían razonablemente posibles.

No obstante, se puede comprobar que, en la práctica, el proceso de "cabildeo" llevará a un aumento del volumen de la legislación (además de crear un mercado especial de servicios legales, muchas veces para utilizarlo en beneficio de ciertos grupos particulares).

Será entonces cuando el marco legal, teóricamente necesario para garantizar los derechos y obligaciones que permitan acuerdos mutuamente beneficiosos entre los ciudadanos (la igualdad de oportunidades), simplemente desaparezca. Lo que se tendrá, ahora, será una economía basada en la competencia por la captura de rentas.

Para entender este proceso podemos observar el siguiente gráfico de cuatro cuadrantes que resume las posibilidades de la generación de beneficios (y las situaciones en las que se convierten en rentas).

Gráfico 6: Esquema de reparto de beneficios y costos

		Beneficios	
		Distribuidos	Concentrados
Costos	Distribuidos	I	II
	Concentrados	III	IV

En un esquema de igualdad de oportunidades, la legislación "debería" ser general sin que NADIE tenga un tratamiento preferencial. En este caso nos encontraríamos en el cuadrante I donde los costos y los beneficios generados por todos están plenamente distribuidos. No obstante, en un sistema en los que priman los grupos de presión los costos estarían distribuidos pero con beneficios (rentas) concentrados en el cuadrante II.

El problema es que, para mantener su popularidad, muchos gobiernos tratarían de aplicar políticas populistas, haciendo que sus costos se concentren en ciertos grupos, (con un sistema progresivo de impuestos, por ejemplo), pero extendiendo los beneficios a grandes grupos, aunque reducidos finalmente en su impacto individual (cuadrante III).

Debe advertirse que el cuarto cuadrante será impracticable, ya que requeriría de una focalización de los costos hacia un grupo, para repartirlos como un beneficio hacia otro grupo. Se trataría, así, de un sistema discriminatorio y, por ende, políticamente inaplicable.

ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN Y RIESGO MORAL

Podemos decir, sin lugar a dudas, que muchas veces el ámbito en el que opera el gobierno constituye también una verdadera "caja negra" para el resto de los ciudadanos. Esto significa que éstos (y particularmente los votantes) no conocen los detalles relacionados con las decisiones gubernamentales.

Este es un típico caso de "asimetría de información", en donde los políticos y los burócratas conocen las decisiones gubernamentales (pero los votantes NO): Esto puede conducir a un "riesgo moral" sobre todo si se opera en el cuadrante II del Gráfico 6.

Para aclarar esto diremos que el "riesgo moral" es el cambio probable de la conducta de un agente económico cuando sus acciones

no son observadas. Esto explica, entonces, la corrupción en el gobierno ya que si bien los políticos y burócratas desean el bienestar ciudadano, también tienen intereses personales que colisionan con sus buenas intenciones.

El riesgo moral no es un problema que afecte tan solo a determinado tipo de políticos y burócratas, no tiene nada que ver con la ideología ni con el sexo o la extracción social de éstos. Es más bien un problema de transparencia o falta de esta.

CONCLUSIÓN

No solo los mercados muestran fallas. También el Estado está sujeto a innumerables ineficiencias y comportamientos indeseados. En todo caso, en una sociedad democrática será importante contar con instituciones fuertes y creíbles, pero será imperativo que las decisiones que se tomen cuenten con mecanismos que faciliten su transparencia.

No obstante, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, es posible también que solo se puedan minimizar las fallas del mercado, pero no eliminarlas.

Asimismo, toda vez que los políticos y los burócratas tienden a hacer crecer el tamaño y la injerencia del Estado en la Economía (y otros ámbitos de la vida social), también es posible que los votantes deseen bienes públicos sin tener que pagar por ellos (o que "otros" paguen por ellos). Por lo tanto, el riesgo del populismo parece ser siempre omnipresente, incluso en las sociedades desarrolladas.

Por último, es posible que las sociedades generen "ciclos políticos" en los que los votantes durante algún tiempo deseen mucha injerencia del Estado, aunque posteriormente y luego que se hagan palpables las ineficiencias, caigan en la cuenta de los altos costos que esto significa y luego deseen retroceder sobre sus propios pasos para iniciar el mismo camino en el futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Buchanan, James M. y Gordon Tullock, 1962. *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, CW Vol. 3, 1999.

Buchanan, James M., 1975. *The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan*, CW Vol. 7, 1999.

De Soto, Hernando y Ghibellini y Ghersi, 1986. *El Otro Sendero*, Instituto Libertad y Democracia. Lima

Kafka, Folke, 1981. *Análisis Económico*. Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico. Lima.